



PONENCIA DEL C. MRO. LIC.
GABRIEL GARCIA ROJAS.
SRIO. LIC. MANUEL TORRES BUENO.
EXP. NÚM. D-4689/59
QUEJOSO: HERMINIA MARTÍNEZ [REDACTED]

Vo.Bo.
EL PONENTE.

----- México, Distrito Federal, ACUERPO DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, correspondiente al día doce de abril de mil novecientos sesenta y

uno. -----

----- VISTOS Y, -----

----- RESULTANDO -----

----- PRIMERO.- Ante esta Suprema Corte ocurrió por su propio derecho Herminia Martínez [REDACTED], en demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Coahuila, que estimó violatorios de las garantías consignadas en los artículos 10 y 16 de la Constitución Federal, y que hizo consistir en la sentencia de nueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, dictada por la mencionada autoridad, en la apelación que se interpuso contra la sentencia definitiva pronunciada por el Juez Tercero de Primera Instancia de Monclova, Coahuila, en el juicio sumario seguido por la quejosa contra Leopoldo S. Villarreal y la Sucesión de [REDACTED].

----- Los antecedentes del caso, según las copias certificadas acompañadas a la demanda, se exponerán en los subsiguientes resultandos. -----

----- SEGUNDO.- Por escrito de primero de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, Herminia Martínez [REDACTED]

[REDACTED] demandó en la vía sumaria, solidaria y mancomunadamente, de Leopoldo S. Villarreal y de la Sucesión de [REDACTED]

[REDACTED] representada por su albacea el Licenciado [REDACTED], el pago de [REDACTED]

[REDACTED] por conceptos de responsabilidad civil, estimando

en dicha suma los daños y perjuicios que ambas demanda-
dos le causaron al coludirse para disponer en su perjui-
cio del cincuenta por ciento de las cosas número [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Coahuila, y de otra sin número, [REDACTED]
[REDACTED], con frente a la calle [REDACTED]
así como del terreno de su edificación que le pertenecen
a título de gananciales por ser bienes adquiridos por su
esposo el citado [REDACTED], durante su matrimonio,
que fue contraído bajo el régimen de [REDACTED].
Dichos bienes no pueden reivindicarse por haber pasado
a terceros de buena fe según aparece de la copia certifi-
cada de sentencia ejecutoria que exhibió. Reclamó además
el pago de los intereses legales y las costas del juicio.
Como hechos que sirvieron de apoyo a su demanda expresó:
El [REDACTED] con-
trajo matrimonio civil con [REDACTED] bajo el régimen
de [REDACTED] según copia certificada del acta -
de matrimonio que adjuntó; durante su matrimonio adquirie-
ron los inmuebles por compra-venta según escrituras, que
también exhibió, de cuatro de agosto de mil novecientos -
cuarenta y tres y diecisiete de marzo de mil novecientos
cuarenta y cuatro, inscritas en el Registro Público de la
Propiedad. Por desavenencias conyugales, por los años de
mil novecientos cuarenta y cinco en adelante se separa-
ron de hecho los consortes; terminados los juicios de
divorcio y de alimentos, que fueron fallados en contra --
de [REDACTED], éste falló. Su citado esposo y su
abogado Leopoldo S. Villarreal simularon un crédito con-
tra el primero, quien se hizo demandar por el segundo; -
en mil novecientos cuarenta y ocho se practicó el embar-
go y remate de las fincas mencionadas, que se adjudica-



con judicialmente a favor del citado Leopoldo S. Villarreal en la irrisoria suma de [REDACTED], escriturándose e inscribiéndose en el Registro Público de la Propiedad. En octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, dicho adjudicatario vendió con consentimiento de su esposa los mismos inmuebles a Raquel Domínguez [REDACTED] en la cantidad de [REDACTED], según escritura de compraventa que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, según aparece del anexo relativo. La colusión de referencia para disponer fraudulenta y simuladamente de los bienes mencionados, y para hacer parecer insolvente a su esposo, en el juicio de alimentos que ella promovió cuando él le demandó el divorcio necesario, está probado con la confesión de su esposo en la diligencia de posiciones celebrada el doce de junio de mil novecientos cuarenta y cinco en el citado juicio de divorcio, cuya copia certificada acompaña. En dicha diligencia declaró que se había hecho embargar simuladamente los bienes de la [REDACTED] con base en créditos simulados, en el juicio que llevó el Licenciado Villarreal de acuerdo con [REDACTED] insolvente, en el que fueron adjudicados y escriturados a favor de ésta dichos bienes. Con tal simulación se privó a la notora de sus derechos de copropiedad sobre los referidos inmuebles que son de la [REDACTED]. Promovió el juicio reivindicatorio contra el adquirente, pero se encontró con que éste los había enajenado en [REDACTED] a Raquel Domínguez [REDACTED] por lo que se declaró improcedente la acción reivindicatoria; y el amparo que pidió contra dicho fallo fue sobreseído por inactividad procesal, quedando firme la sentencia dictada por la Primera Sala del Supremo Tri-

bunal de Justicia del Estado de Coahuila. Como los actos simulados están prohibidos por la ley y quien obra ilícitamente en perjuicio de otro está obligado a reparar el daño, es indudable que tanto la Sucesión de su esposo como Leopoldo S. Villarreal están obligados a restituir las cosas al estado que tenían antes de los actos ilícitos; y como esto no es posible en virtud de la ejecutoria de referencia, la restitución debe traducirse en el pago de años y perjuicios que estima en [REDACTED]

[REDACTED] toda vez que las fincas en cuestión valen [REDACTED].
[REDACTED] Como fundamentos de derecho invocó los artículos 1807, 1812, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2012, 2074, 2075, 2076, 830, 831, 184, 183 y 2621 del Código Civil, lo., 25, 430 fracción VIII, 433, 434, 435 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles ambos del Estado.

- - - TERCERO.- Por escrito de doce de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, Leopoldo S. Villarreal contestó la demanda: Negó en todas sus partes el libelo alegando que la actora carecía de derechos y acción para demandarlo, porque la acción ejercitada se encuentra prescrita y carece de causa jurídica en que pueda apoyarse. Los bienes reclamados nunca pertenecieron a la sociedad conyugal de la actora y de su esposo, cuestión que fue decidida en sentencia firme como se comprueba con la copia certificada expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, exhibida por la propia demandante. No es verdad que se haya coludido con [REDACTED] para simular un crédito en contra de éste y demandarlo luego en un juicio hasta obtener el embargo, remate y adjudicación de los inmuebles de referencia. No es cierto que se haya coludido con el esposo de la actora para dispo-



por fraudulentamente de los referidos bienes, privándola de los derechos de copropiedad que dice tener sobre ellos. La confesión del de cujus verificada en el juicio de divorcio sólo produce efecto en lo que perjudica al absolvente, y no al contestante que es ajeno al juicio en que se produjo, y por tanto no puede servir dicha confesión para justificar la simulación que le atribuye la demandante. No siendo ésta copropietaria de los bienes que reclama no se le causó ningún daño ni perjuicio con esos actos simulados, aun suponiéndolos ciertos. Es verdad que la actora ejercitó acción en contra del contestante y de las otras personas para obtener la nulidad de las ventas de los mismos inmuebles; pero es inexacto que dicha acción se haya declarado improcedente por las razones que indica la actora, o sea porque los bienes hubiesen pasado a terceros de buena fe, pues según la sentencia de siete de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la improcedencia de dicha acción se basó en que los inmuebles de referencia no formaban parte de la [REDACTED]. Tampoco es verdad que el demandado haya simulado actos de colusión con el de cujus para privar a la actora de algo bien, ni que haya ejercitado hechos ilícitos con tal finalidad; habiéndose resuelto en sentencia firme que la actora no es copropietaria de los inmuebles que reclama, carece de interés jurídico sobre ellos, y aun suponiendo que los actos de simulación se hubiesen realizado, no pudieron causarle ningún perjuicio. Wesó la aplicación de las disposiciones legales invocadas por la demandante y opuso las siguientes excepciones: -- -- -- lo- Falta de acción, porque aunque es verdad que los inmuebles de referencia fueron adquiridos durante --

la existencia de la [REDACTED] según los artículos 183 y 189 del Código Civil del Estado, dicha sociedad se rige por las capitulaciones matrimoniales y en lo no previsto en ellas por las disposiciones relativas del contrato de sociedad general; en este caso se probó que los bienes citados fueron adquiridos por [REDACTED] en lo personal, y la actora no puede justificar que en las capitulaciones matrimoniales se haya estipulado que los bienes adquiridos por su marido deban formar parte de la [REDACTED], por lo que es evidente que la demandante carece de acción para exigir el pago de daños y perjuicios, toda vez que en nada le afectan las operaciones que se llevaron a cabo respecto de los mismos bienes, aunque tales operaciones se hayan originado por actos simulados o ilícitos. Consecuentemente en nada perjudican tales actos los intereses jurídicos de la actora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10. del Código de Procedimientos Civiles del Estado. - - - - - 2o- La defensa de falta de acción la fundó en los artículos 10., 91 y 92 del citado Código adjetivo. Según sentencia firme de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los bienes en disputa no son ni han sido de la [REDACTED]; y siendo dicho fallo la verdad legal por haber causado ojeantoría, los citados inmuebles no son ni fueron nunca de la [REDACTED] razón por la cual la actora carece del derecho de propiedad que alega sobre dichos inmuebles; y carece también de acción para exigir el pago de daños y perjuicios. - - - - - 3o- La excepción de prescripción la fundó en los artículos 1155, 1156 y 1158 fracción V del citado Cód-



Civil, y la opone en forma subsidiaria. El último de dichos preceptos establece que prescribe en dos años la responsabilidad civil provenientes de actos ilícitos y que el término de la prescripción comienza a correr desde la fecha de éstos. La actora fundó su demanda en actos que dice fueron confesados por su citado esposo en las posiciones que absolvió el doce de junio de mil novecientos cuarenta y cinco, de lo que aparece que con anterioridad a esa fecha ya se habían verificado dichos actos; y por consiguiente desde entonces hasta el momento de la presentación de la demanda han transcurrido más de los dos años que la ley requiere para la prescripción. Pero en el caso de que no fuera aplicable ese término especial, también se encontraría prescrita la acción de acuerdo con el término ordinario establecido por el artículo 1156 del mencionado Código Civil, pues a partir de la fecha indicada ya han transcurrido más de los diez años que establece ese precepto. - - - - -

- - - - - 40- La defensa de falta de acción se opone en el artículo 10. del Mencionado Código procesal, es procedente tal defensa porque no es verdad que el contestante se haya coludido con el esposo de la actora para simular un crédito a fin de privarla de los derechos de copropiedad que afirma tener sobre los referidos inmuebles. La confesión del esposo de la actora no prueba la colusión, porque sólo puede perjudicar al absolvente, pues de lo contrario podría resultar que en un juicio en que intervenga un tercero, se confabularan entre sí los litigantes en contra de este último, para sujetarlo a los resultados de la confesional. Y no existiendo en el caso otra prueba no pueden tenerse por ciertos los actos que le in-

puta la demandante, por lo que carece de acción para exigir el pago de los daños y perjuicios de referencia. - -

- - - - - 5o- La sine actione agis y la falta de causa jurídica para pedir, las fundó en el artículo 1o. del mencionado Código adjetivo, y sostuvo la total negativa de la demanda. - - - - -

- - - - - Ofreció las pruebas que estimó pertinentes y pidió se le absolviera y se condenara a la actora al pago de las costas y gastos del juicio. - - - - -

- - - - - Por auto de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta se declaró en rebeldía a la Sucesión demandada por no haber contestado su demanda, y se tuvieron por presuntamente confesados los hechos de ella. - - - - -

- - - - - En réplica Herminia Martínez [REDACTED] ratificó en todas sus partes su libelo, negó las afirmaciones del demandado y estimó improcedente las excepciones que éste opuso. - - - - -

- - - - - En réplica Leopoldo S. Villarreal ratificó en todas sus partes su escrito de contestación a la demanda y negó las afirmaciones de la actora. - - - - -

- - - - - CUARTO.- Seguido el juicio por sus trámites legales, el Juez a quo dictó sentencia definitiva que contiene los siguientes puntos decisivos: - - - - -

- - - "PRIMERO.- Ha procedido en este juicio la vía sumaria civil. SEGUNDO.- La parte actora - señora Herminia Martínez [REDACTED], no probó su acción. TERCERO.- El demandado Leopoldo S. Villarreal Corona justificó sus excepciones. CUARTO.- Se absuelve al demandado Leopoldo S. Villarreal Corona y a la Sucesión del señor [REDACTED], de las acciones ejercitadas en este procedimiento por la señora Herminia Mar-



79
tínez [REDACTED], por medio de los cuales los demandó por el pago de la cantidad de [REDACTED] Moneda Nacional, solidaria y mancomunadamente, a título de responsabilidad civil, pues en esta suma estimó los daños y perjuicios que ambos demandados le habían causado al colucirse para disponer del 50% cincuenta por ciento de las casas números [REDACTED] de esta Ciudad, y otros [REDACTED]

[REDACTED], así como el terreno de su edificación que sostiene le pertenecían a título de gananciales, por los bienes adquiridos por su esposo [REDACTED] durante su matrimonio contraído bajo el régimen de [REDACTED].
QUINTO.- No se hace especial condenación en costas."

Inconforme la actora con la anterior sentencia, interpuso en su contra el recurso de apelación, que en la alzada fue resuelto confirmando la sentencia recurrida y condenando a la apelante al pago de los costos de ambas instancias.

Finalmente la propia actora reclamó la sentencia de segunda instancia mediante el presente juicio constitucional. La demanda de amparo, que aparece presentada en tiempo, fue admitida por auto de seis de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve. El Agente del Ministerio Público Federal manifestó que se abstendía de intervenir por carecer el negocio de interés público. El ocho de octubre del año citado se turnaron las actuaciones al Po-

nente. Por decretos de quince de febrero, once de junio y quince de julio de mil novecientos sesenta, se mandaron agregar tres escritos de la quejosa. La última notificación se hizo el diecinueve de julio del mismo año. -

- - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - -

- - - - PRIMERO.- La existencia del fallo reclamado se acredita con las copias certificadas acompañadas a la demanda, en una de las cuales aparece **transcrito** dicho fallo. - - - - -

- - - - SEGUNDO.- En sus conceptos de violación, la quejosa expresó en síntesis: - - - - -

- - - - lo- La Sala responsable sostuvo en el considerando primero de la sentencia reclamada que no demostró la actora y hoy quejosa las capitulaciones matrimoniales, y que por tanto los bienes materia de la demanda no pertenecen al fondo común de la [REDACTED] ni tiene sobre ellos ningún derecho la demandante. Desconocer la copropiedad de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio por falta de capitulaciones matrimoniales, lleva al absurdo de negar la existencia de la [REDACTED]

[REDACTED] por falta de ellas, lo cual va contra la naturaleza de dicha sociedad y del matrimonio, porque se desconoce el espíritu de los artículos 183, 184 y 194 del Código del Estado, los precedentes legislativos y la doctrina que siempre han sostenido la legalidad de esa sociedad aunque los cónyuges no celebren ningún contrato relativo a sus intereses pecuniarios, pues en ese caso la ley presume que se sometieron a las reglas que ella establece sobre la materia. La sociedad conyugal se originó en las costumbres más antiguas y fue sancionada por las leyes del Fuero Juzgo, del Fuero Real y de la Novísima Recopilación;



está fundada en la consideración de que si el hombre -- por su aptitud y trabajo adquiere un patrimonio, la mujer le ayuda por su economía y su celo a formarlo y conservarlo. Con la sociedad conyugal nace la comunidad de bienes, salvo pacto en contrario; pero no existiendo ese pacto la sociedad conyugal se regía según la antigua legislación por las disposiciones del contrato de sociedad en general, que es lo mismo que prescribe la segunda parte del artículo 183 del actual Código Civil del Estado. El artículo 194 del propio ordenamiento manda que la -- propiedad de los bienes comunes reside en ambos cónyugos, mientras subsiste el matrimonio, es decir, establece la copropiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Consecuentemente en el precitado artículo 183 manda que la sociedad conyugal se rija por las capitulaciones matrimoniales. En lo no estipulado expresamente por las disposiciones del contrato de sociedad, la falta de capitulaciones matrimoniales, no destruye la comunidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Así lo ha reconocido la Suprema Corte en la ejecutoria dictada en el amparo D-4172/57 promovido por Genoveva Varga de Vázquez, publicado en la página 50 del informe de la Tercera Sala de mil novecientos cincuenta y ocho, que dice: establecidas las diferencias entre copropiedad y sociedad conyugal, esta última no es una verdadera sociedad sino una copropiedad, porque no hace nacer una persona jurídica distinta de los cónyuges, puesto que el artículo 194 del Código Civil establece que el dominio de los bienes comunes reside en ambos consortes mientras subsiste la sociedad. Confirma esta tesis el artículo 185 al hablar de esposos copartícipes, pues copartícipes, copropietarios o comuneros tienen la misma connotación jurídica.

Por consiguiente debe concluirse que la sociedad conyugal se encuadra dentro de la llamada comunidad germánica o comunidad de mano común. En la diversa ejecutoria dictada en el amparo 863/49, promovido por Crispín Alvarado, la misma Suprema Corte sostuvo que la sociedad conyugal constituye una comunidad de bienes entre los consortes mientras subsiste el matrimonio; y que encontrándose los bienes gananciales mezclados o confundidos sin poderse precisar a cuál de los cónyuges pertenece por la indivisión que subsiste hasta que termine la sociedad conyugal, tanto el marido como la mujer pueden promover por su propio derecho en defensa de dichos bienes, porque todo cuanto gana el marido o la mujer es común de los dos.

Esta tesis se publicó en el Suplemento al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos cincuenta y seis.

- - - Al sostener la tesis contraria la Sala responsable violó por inobservancia los artículos 81 y 83 del Código de Procedimientos Civiles, y los 183, 184, 194, 830, 831 y 935 del Código Civil del Estado; e infringió asimismo los artículos 1807 y 1812 del mismo ordenamiento, los cuales establecen que el que obrando ilícitamente causa daño a otro debe repararlo, y que cuando la restitución de las cosas al estado anterior sea imposible debe pagar los daños y perjuicios consiguientes. La responsable omitió condenar a la Sucesión de [REDACTED] la responsabilidad civil que se le demandó, a pesar de estar probados con la confesión del de cujus los actos ilícitos que causaron los daños que se reclaman; y violó además el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles de la propia Entidad. - - -

- - - 2o- La responsable insiste en el considerando segundo en que no justificó la actora con las capitulacio-



nes matrimoniales la copropiedad en que fundó su demanda; y como esto es lo mismo que quedó estudiado en el anterior concepto de violación, repite los argumentos ya citados. - - - - -

- - - 3o- En el considerando tercero la Sala de apelación expresó que la confesión del de cujus sólo perjudica al que la hace, olvidando que la confesión de uno de los simuladores necesariamente afecta al otro, pues de lo contrario se tendría el acto simulado solamente por uno de los contratantes y no por lo que respecta al otro, lo cual es absurdo y antijurídico, puesto que la confesión de simulación de una parte produce graves presunciones contra la otra. Por tanto, dicha Sala apreció indebidamente dicha prueba confesional, y violó los artículos 379, 380, 402, 407 y 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. - - - - -

- - - 4o- El Tribunal se quem confirmó en el considerando cuarto de la sentencia reclamada la tesis del Inferior relativa a la prescripción de la acción, sin estudiar -- el agravio en que se hizo notar que el Inferior contó el tiempo de la prescripción desde la fecha en que se simularon los actos y no cuando se declaró improcedente la acción reivindicatoria, en virtud de la ejecutoria de la Suprema Corte que sobreescribió el amparo promovido contra la sentencia correspondiente, pues fue en ese momento cuando se resintió el perjuicio de los actos simulados; el artículo 1831 del Código Civil del Estado expresa que la prescripción corre desde que se causa el daño y en el caso la sola simulación de los actos aludidos no causa ningún daño, sino hasta que se estableció con certeza que no podían reivindicarse los bienes. Ante esta situación procedía exigir el pago de los daños, a partir del día en que la

quejosa conoció la mencionada ejecutoria, diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, fecha del auto de la Sala responsable en que mandó agregar la propia ejecutoria de sobreseimiento; y de esa fecha al seis de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho en que se presentó la demanda, no habían transcurrido los dos años a que se refiere el artículo 1831 del Código Civil del Estado. A lo anterior cabe agregar que la quejosa nunca ha dejado de gestionar la defensa de sus intereses desde que empezó a litigar con su marido, como consta en las copias certificadas adjuntas a la demanda de amparo, por lo que sus demandas anteriores necesariamente han interrumpido la prescripción; y por consiguiente la Sala responsable violó por inexacta aplicación el artículo 1831 del Código Civil. - - - - -

- - - - Sostuvo la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada por declarar ésta que la actora no probó su excepción; y que el demandado Leopoldo S. Villarreal sí justificó sus excepciones; y por no resolver nada respecto de la Sucesión de [REDACTED], a quien implícitamente absolvió injusta e ilegalmente. - - - - -

- - - - 5o.- En el considerando quinto de la sentencia reclamada se condenó a la actora al pago de las costas de ambas instancias, aplicando incorrectamente la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque la hoy quejosa se limitó a ejercitar sus derechos en defensa de sus intereses, sin temeridad ni mala fe; lo que pasa es que el asunto se ha resuelto muy superficialmente. - - - - -

- - - - TERCERO.- Las razones invocadas por la Sala responsable, en apoyo de la sentencia combatida, son en síntesis las siguientes: - - - - -



82

- - - 10- De las actuaciones judiciales aparece que -
la actora no comprobó ser copropietaria de los bienes -
reclamados en virtud de la [REDACTED], pues aun-
que tales bienes hayan sido adquiridos durante el metri-
monio y se rigen por las capitulaciones matrimoniales, -
es menester que en dichas capitulaciones se declare expre-
samente si comprenden todos los bienes de un cónyuge o -
parte de ellos, como lo establecen los artículos 183 y -
189, fracciones IV y VIII del Código Civil del Estado; y
no habiendo esa estipulación en las capitulaciones metri-
moniales no es de estimarse que los inmuebles objeto del
debate hayan pertenecido a la [REDACTED] por lo
que la actora no tiene derecho de exigir las prestaciones
que demanda. - - - - -

- - - 20- Aunque los bienes fueron adquiridos por su -
marido durante el matrimonio, la [REDACTED] se ri-
ge por las capitulaciones matrimoniales, atento lo dispues-
to por los artículos 183 y 189 del mencionado Código Ci-
vil, y la parte actora no justificó que en las capitulacio-
nes matrimoniales se haya estipulado que dichos bienes -
formen parte de la [REDACTED]. Consecuentemente
no existe la comunidad que invoca la actora. - - - - -

- - - 30- La confesión rendida por el demandado en un -
juicio en el que el demandado Leopoldo S. Villarreal no
fue parte, no puede tener valor probatorio en contra de él.

- - - 40- La ley establece claramente que la acción para
exigir la reparación de los daños causados prescribe en
dos años contados a partir del día en que se haya produci-
do el daño; y en el caso la apelante presentó su demanda
después de haber transcurrido ese término. - - - - -

- - - 50- Siendo improcedentes los agravios, debe con-
firmarse la sentencia apelada y condenarse a la actora -

el pago de las costas de ambas instancias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 fracción IV del mencionado Código adjetivo. - - - - -

(X) - - - - CUARTO.- Antes de proceder al estudio de los conceptos de violación que se refieren a la prueba de los hechos fundatorios de la acción de daños y perjuicios intentada por la ahora quejosa, por razones de índole procesal debe analizarse en primer término el cuarto de dichos conceptos en que se combate la consideración hecha por la Sala responsable en el sentido de que la mencionada acción está prescrita. Es fundado ese concepto por las siguientes razones: La quejosa sostiene que la prescripción debe contarse de conformidad con el artículo 1831 del Código Civil del Estado de Coahuila, a partir de la fecha en que se causó el daño, es decir desde el diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, fecha del auto en que la Sala responsable mandó agregar al tomo relativo la ejecutoria de sobreseimiento dictada por esta Suprema Corte en el amparo D-3889/54, el veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y seis; alega además que fue hasta la fecha del citado auto cuando resintió el perjuicio de los actos simulados; que el daño no se produjo por la sola simulación de los actos jurídicos, sino por sus efectos, que no pudieron destruirse mediante el juicio de nulidad y de reivindicación; y que a lo anterior debe agregarse que la prescripción se interrumpió porque no ha dejado de gestionar la defensa de sus intereses, y porque ha presentado varias demandas al respecto. Para mejor conocimiento del negocio es pertinente precisar los antecedentes del mismo, según aparece de las constancias de autos y de los anteriores amparos seguidos por la propia quejosa y por el tercero perjudicado Leopoldo



Villarreal y coagraviados: En la copia certificada - que obra en el juicio de amparo D-4376/53 promovido por aquélla, aparecen varias constancias de las que se desprenden: En la escritura de adjudicación de dos de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, otorgada en rebeldía de [REDACTED] por el personal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monclova, Coahuila, a favor de Leopoldo S. Villarreal, se dice que el citado adquiriente demandó en la vía ejecutiva mercantil de [REDACTED], mediante libelo de siete de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, el pago de [REDACTED] y accesorios legales, con fundamento en tres letras de cambio y un pagaré; las tres primeras fueron giradas por Oscar Rodríguez Fuentes a su propia orden y aceptados por el demandado; y el pagaré fue otorgado por el propio reo a la orden de Antonio Prieto; tales documentos fueron endosados en propiedad por los mencionados beneficiarios a favor de dicho actor; y seguido el juicio por sus trámites legales, el veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco se dictó sentencia de remate. La hoy quejosa promovió amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito de Piedras Negras, Coahuila, el quince de agosto siguiente, contra la mencionada sentencia de remate; pero dicho juicio constitucional fue sobreesido el siete de noviembre de ese mismo año, en sentencia que luego causó ejecutoria. Por auto de ocho de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, dictada en el referido juicio ejecutivo mercantil, se declaró ejecutoriada la sentencia de remate. La almoneda correspondiente se verificó el veintiséis de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, en la que se adjudicaron al ejecutante, por la cantidad de [REDACTED], los bienes embargados, que son los mencionados en -

el juicio de reparación de daños y perjuicios; y el dos de junio de ese mismo año, el personal del Juzgado otorgó la mencionada escritura de adjudicación. El adquirente -- vendió a su vez los mismos bienes a Raquel Domínguez [REDACTED] en escritura de veintiocho de octubre del año citado en la cantidad de [REDACTED]. El veintiséis de mayo de mil novecientos cincuenta la quejosa demandó -- de Leopoldo S. Villarreal, Cristina González de Villarreal esposa del anterior, y de Raquel Domínguez [REDACTED], la nulidad de las mencionadas escrituras, la de adjudicación otorgada a favor del primero, y la de venta extendida a favor de la última; y la reivindicación de los inmuebles de referencia. Seguido el juicio por sus trámites legales, -- en primera instancia se declaró que la actora no probó -- la acción y se absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas; y en la alzada que se tramitó a petición de la actora, se confirmó la sentencia apelada. Contra -- la mencionada sentencia de segunda instancia promovieron sendos amparos la demandante Herminia Martínez [REDACTED] -- y el demandado Leopoldo S. Villarreal, los cuales se resolvieron el veintinueve de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro; el primero concedió la protección -- federal a la quejosa para el efecto de que la responsa-- ble determinara si con las pruebas aportadas en autos -- se habían acreditado los elementos de las acciones deducidas, y estudiar las defensas y excepciones opuestas -- por los demandados. El segundo amparo fue sobreesido, en virtud de lo resuelto en el primero. En cumplimiento de -- la mencionada ejecutoria que amparó a la hoy quejosa, el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal Superior de -- Justicia del Estado de Coahuila, dictó nueva sentencia el siete de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, re-



olviendo: la actora no probó los hechos constitutivos de su acción; la demandada Raquel Domínguez [REDACTED]

[REDACTED] justificó su excepción de falta de acción sólo por lo que hace a no haber procedido de mala fe; los demandados Leopoldo S. Villarreal, y su esposa justificaron su defensa de falta de acción únicamente por lo que hace a que la actora no probó la existencia de capitulaciones matrimoniales relativas a su matrimonio con [REDACTED]

[REDACTED] los previos demandados no justificaron su excepción de cosa juzgada; la Sucesión de [REDACTED] no probó su excepción consistente en la inexistencia de la sociedad conyugal de la actora con [REDACTED]; y se absolvió a los reos de la demanda entablada en su contra, sin hacer especial condenación a costas. Contra dicho senten-
cia interpuso [REDACTED] propia quejosa el diverso amparo 1043849/50 el cual fue sobrescrito mediante ejecutoria de veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y seis por inactivi-
dad procesal. Posteriormente, Hermina Martínez [REDACTED]

[REDACTED] promovió el juicio antecedente del presente ampa-
ro, y en su libelo demandó solidariamente de Leopoldo S. Villarreal y a la Sucesión de [REDACTED], el pago de

[REDACTED] a título de responsabilidad civil por los daños y perjuicios que le causaron por dis-
poner del cincuenta por ciento de los inmuebles adquiridos por el [REDACTED] durante su matrimonio con la actora, con-
traído bajo el régimen de [REDACTED]. La secuela del juicio ya quedó relatada en los resultados de este fallo.

Según el artículo 1831 del Código Civil, la acción para exigir la reparación de los daños causados por actos ilícitos, prescribe en dos años contados a partir del día

en que se haya causado el daño. Es verdad que los actos ilícitos que imputa la hoy quejosa a los citados Leopoldo S. Villarreal y [REDACTED], ocurrieron como lo reconoce el primer demandado en su escrito de contestación a la demanda, antes de la confesión que de ellos hizo el segundo, en diligencia de doce de junio de mil novecientos cuarenta y cinco; pero no es correcto contar el término de la prescripción desde esta fecha, porque los actos de colusión a que se refiere la quejosa no pueden concebirse verificados en el momento en que [REDACTED] aceptó los documentos que sirvieron después para que Leopoldo S. Villarreal le embargara los bienes de referencia, sino que según los antecedentes ya expuestos, los actos ilícitos encaminados a violar los derechos de la demandante constituyen una prolongada secuela, cuyos puntos esenciales son además de la firma de los referidos documentos, el juicio ejecutivo seguido en rebeldía de [REDACTED] que culminó con la sentencia de remate, la almoneda y la escritura de adjudicación ya mencionados; la venta inmediata que hizo el adquirente de dichos bienes a favor de Raquel Domínguez [REDACTED] efectuada a los cuatro meses y días después de la adjudicación; la oposición del propio Leopoldo S. Villarreal y de la Sucesión de [REDACTED], a la demanda de nulidad y reivindicación intentada por la ahora quejosa, procedimiento que dio lugar a los diversos amparos ya mencionados, en el último de los cuales se dictó el sobreseimiento, con lo que quedó firme la sentencia que desestimó las pretensiones de la actora. Hasta ese momento, debe estimarse consumado definitivamente el perjuicio que les imputa la quejosa; y notando el plazo de dos años a que se refiere el precitado artículo 1831 debe empezar a contarse desde la fecha de la



...ificación de la mencionada ejecutoria de sobreseimiento, que aparece hecha por lista de once de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis. Y como la nueva demanda del juicio de reparación del daño está datada el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, es inconcuso que no había transcurrido el término de referencia. - - - - El precitado artículo 1831 del Código Civil del Estado de Coahuila, correspondiente al 1934 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, establece que "La acción para ejercitar la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño." En este asunto se entiende que el daño se causó a partir de la notificación de la mencionada ejecutoria de sobreseimiento del amparo, porque hasta entonces se supo que al sobreseerse el juicio constitucional quedó firme la sentencia reclamada, pronunciada en el mencionado juicio reivindicatorio y de nulidad, la cual desconoció la procedencia de esas acciones. En ese momento supo la afectada que no iba a obtener la restitución de su copropiedad y que quedaba privada de ella; y hasta entonces pudo hacer valer la acción de daños y perjuicios, considerando que si no obtenía la restitución de su propiedad, en defecto de ella podía ejercer la acción de daños y perjuicios consistente en el pago del cincuenta por ciento del valor de los bienes de la [REDACTED], que era lo que le correspondía. - - - - Sería absurdo pretender que juntamente con las acciones de nulidad y reivindicación se intentara la de reparación de daño, la cual resulta contradictoria con las dos primeras, puesto que en caso de que estas fueran procedentes no existiría base para la reparación de un daño que no existía y era necesario esperar a que éste se

consumara para que pudiera ejercitarse la acción correspondiente. El artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que no pueden deducirse subsidiariamente acciones contrarias o contradictorias; y esta Suprema Corte ha establecido en varias ejecutorias (D-234950, Josefina Aceves Cerda y D-1257/53 Carlos Partida Crespo, Suplemento al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos cincuenta y seis, páginas 20 y 21), que las acciones son contrarias o contradictorias cuando tienden a producir resultados incompatibles, como sucede en el caso, ya que la agraviada no puede obtener sentencia favorable tanto en la nulidad y reivindicación aludidas, como en la reparación del daño; la procedencia de una acción excluye la de la otra y viceversa. Y como la ley prohíbe intentar subsidiariamente acciones contrarias o contradictorias, fue preciso que la demandante esperara que se resolviera en definitiva lo relativo a sus dos primeras acciones, para intentar luego la tercera. Por consiguiente, procede concluir que no pudo operar en su contra la prescripción de esta última acción, por lo que procede entrar al estudio de las demás violaciones. - - - - -

- - - - QUINTO.- Son fundados también los dos primeros conceptos de violación, por las siguientes razones: En autos aparece probado con el acta de matrimonio correspondiente, que Herminia Martínez [REDACTED] contrajo matrimonio civil con [REDACTED], el [REDACTED] [REDACTED] bajo el régimen de [REDACTED] [REDACTED], "conforme a las capitulaciones matrimoniales que tienen presentadas"; pero a pesar de esta referencia a dichas capitulaciones, no se exhibieron en autos y al parecer nunca existieron, puesto que ni la demandante y ahora quejosa afirmó su existencia. No hay disputa acerca de que los bienes mencionados fueron adquiridos por el de cujus durante el matrimonio; y la cuestión se reduce a determinar si aun faltando dichas capitulaciones debe conceptuarse que los citados bienes entraron a formar parte de la [REDACTED]. Sobre este particular esta Suprema Corte ha establecido en numerosas ejecu-



torias, como son las dictadas en los amparos D-5360/56
[REDACTED] D-1307/57 Lucrecia Albert de Orbe, ---
D-2031/57 [REDACTED]; D-4832/58 Eva Or-
tega Estrada y D-7145/58 Enrique Landgrave Sánchez, la
siguiente tesis: - - - - -

- - - "Demostrada la existencia del contrato
de matrimonio, celebrado con el régimen de -
sociedad conyugal, debe establecerse que obli-
ga a los contratantes, no sólo al cumplimiento
de lo expresamente pactado, sino también a las
consecuencias, que según su naturaleza son con-
formes a la buena fe, al uso o a la ley. Por -
tanto, la falta de capitulaciones matrimoniales,
no puede originar que no se cumpla la voluntad -
de las partes, ni se produzcan los efectos de la
comunidad de bienes queridos, ni tampoco puede -
determinar que se considere el matrimonio, como
regido por la separación de bienes, contraria -
al consentimiento de los cónyuges. La sociedad
conyugal, si bien tiene semejanzas con el con-
trato de sociedad, no es idéntica a él, puesto
que ésta tiene personalidad jurídica propia, dis-
tinta de la de los socios, y persigue fines econó-
micos, en cambio, aquélla, según su naturaleza,
no es sino una verdadera comunidad, de mera con-
servación y aprovechamiento mutuo; una propia co-
munidad de intereses, que responde adecuadamente
a los cónyuges, que unen sus personas y sus inte-
reses. Esta comunidad por principios de equidad y
justicia, consecuentemente con la situación de mu-
tua colaboración y esfuerzos que vincula a los cón-
yuges, los da derecho igual sobre los bienes, de -

manera que como partícipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el artículo 183 del Código Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprenderá los bienes muebles o inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieren durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculieres de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, así debe interpretarse que lo desearon por ser esto además, lo más lógico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con sociedad conyugal." - - - - -

- - - "...A los razonamientos que fundan los fallos antes citados, debe agregarse: a)- De acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil vigente, el matrimonio no puede subsistir, sin un régimen respecto a los bienes, sea de separación o de sociedad conyugal. Para ambas hipótesis, según lo previsto por el artículo 179, se requieren capitulaciones matrimoniales; en consecuencia, de admitirse la tesis de la responsable en el sentido de que a falta de capitulaciones no existe

*Quitarle la
parte beneficiada
por el pacto*



la sociedad conyugal sino el régimen de separación de bienes, en igualdad de condiciones se debería concluir, que a falta de capitulaciones en el caso de separación de bienes, que daba establecida la sociedad conyugal, solución inaceptable, porque la falta de capitulaciones no puede conducir a que se ~~base~~ de una hipótesis a la contraria, lo que implicaría, además, contrariar la voluntad expresada por las partes en el momento de celebrarse el matrimonio. b) - Por disposición de la LEY, el contrato de matrimonio, exige la declaración precisa del régimen sobre el que va a constituirse; si por cualquier causa las capitulaciones resultan incompletas, cuando los contrayentes hayan manifestado su voluntad de establecer la sociedad conyugal, ésta según el Artículo 183 del Código Civil se regirá, en lo que no estuviere expresamente estipulado por las disposiciones relativas al contrato de sociedad. En tal virtud, la omisión no conduce sino a la aplicación de las reglas que el código estatuye respecto al contrato de sociedad, lo que explica que ya no corresponda a las partes determinar en otra forma, la disposición de los bienes, sino que debe estar a lo previsto en el ordenamiento legal citado. c).- Aun más, el legislador se inclina abiertamente hacia la sociedad conyugal, puesto que en el artículo 208 autoriza la separación, parcial de los bienes pero si estos no se precisan en las capitulaciones de separación, se previene que serán objeto de la sociedad conyugal, de modo que lo que no está reservado a

la pertenencia individual de cada cónyuge, --
formará parte de la comunidad de bienes, que
es en rigor jurídico la sociedad conyugal." -
(D-4832/958 Eva Ortega Estrada). - - - - -

- - - - En vista de la tesis sustentada por esta Suprema Corte y de que las disposiciones invocadas corresponden aun en sus números a las que rigen en el Estado de Coahuila, y no existiendo capitulaciones matrimoniales en el presente caso, puesto que el demandado sostuvo que la actora no había justificado su existencia, procede concluir que los bienes mencionados por ésta sí forman parte de la [REDACTED] por lo que sí tiene interés y derecho la hoy quejosa para intentar la mencionada acción de reparación de daño. - - - - -

- - - - SEVTO.- Es asimismo fundado el tercer concepto de violación. Según aparece en las sentencias de primera y segunda instancias, la actora invocó como prueba de su acción el hecho de que su esposo [REDACTED] confesó en el juicio de divorcio necesario que siguió en contra de ella, que se había coludido con Leopoldo S. Villarreal para simular el crédito mencionado en la demanda; pero -- tanto el Juez a quo como el ad quem sostuvieron que dicha confesión sólo puede perjudicar a quien la hizo y no a Leopoldo S. Villarreal. Es correcta esta argumentación -- pero debe tomarse en cuenta que además de dicha confesión la conducta procesal de éste y del hoy de cujus confirma la simulación del crédito de referencia, ya que el -- juicio ejecutivo mercantil se siguió sin oposición del -- deudor, y tan pronto como adquirió el acreedor los bienes en la adjudicación que se le hizo, se apresuró a transmitirlos a tercera persona. Y aun la forma en que el citado -- acreedor contestó la demanda de reparación del daño, hace



suponer que efectivamente el crédito que sirvió para embargar al ahora de cujus, sólo fue un acto simulado para hacerlo aparecer como insolvente, evitando así tener que dar alimentos a su esposa, como se había resuelto en el citado juicio de divorcio. En efecto, en su mencionado escrito de contestación, Leopoldo S. Villarreal dijo: - - - - -

- - - "Siendo estricta y legalmente falso que sobre los bienes del caso haya tenido la señora - [REDACTED] un derecho de copropiedad por virtud de una [REDACTED] no se le causó ningún daño ni ningún perjuicio con esos actos simulados, aun suponiéndolos realmente ciertos, porque no representando, como antes digo, ningún derecho sobre los referidos bienes, en nada se afectaron con aquellos actos sus intereses jurídicos..." - - - "aún en el supuesto, sin conceder de que aquellos actos de simulación se hubiesen realizado, sin embargo, no pudieron causarle ningún perjuicio, por no representar ningún derecho..." - - - - -

- - - "...no teniendo a su favor el derecho de copropiedad que se irroga sobre aquellos bienes, en nada le afectan las operaciones que se llevaron a cabo en relación con los mismos, aun cuando tales operaciones se hubiesen originado por virtud de actos simulados o ilícitos, ya que, como antes digo, de suponer ciertos estos actos en nada perjudica a sus intereses jurídicos, supuesto que, en todo caso, recayeron sobre bienes en los que la propia actora no tiene o representa ningún derecho..." - - - - -

--- "Ahora bien, la actora hace descansar su acción de responsabilidad civil que deduce en este juicio, en actos simulados entre su esposo el señor [REDACTED] y el suscrito y con cuyos actos dice se le originaron los daños y perjuicios que me reclama; estos actos, según lo afirma y comprueba con constancia certificada de una actuación judicial, fueron confesados por su citado esposo en diligencia de absolución de posiciones de fecha doce de junio de mil novecientos cuarenta y cinco, o sea, que con anterioridad a esa fecha se habían verificado ya aquéllos actos que ella misma estima simulados..."

--- Esta Suprema Corte ha establecido que ordinariamente es difícil que exista prueba directa respecto de la simulación, porque los simuladores tienen especial empeño en ocultar a los demás sus propósitos; y que por consiguiente para estimar probada la simulación puede valerse el Juzgador de pruebas presuncionales. En el caso, la confesional rendida por el de cujus en el referido juicio de divorcio, puede considerarse como un indicio, que unido a la conducta procesal de Leopoldo S. Villarreal; y a la ostensible actitud de impunidad que aparece en su escrito de contestación a la demanda, se llega a la conclusión de que sí existieron los actos simulados de que se trata. En consecuencia, debe estimarse probada con esos elementos la acción de pago de daños y perjuicios intentada por la actora. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el diverso juicio sobre nulidad y reivindicación intentado antes por la misma actora, se hayan desestimado las acciones que hizo valer, pues precisamente el haber obtenido sentencia



HERMINIA MARTINEZ

D.-4689/59.- (32)

29

favorable los demandados en ese juicio, es lo que dio nacimiento a la acción de reparación del daño intentada en el nuevo juicio, antecedente del presente amparo.

SEPTIMO.- Siendo fundados los anteriores conceptos de violación, el Magistrado responsable deberá dictar nueva sentencia, a fin de reparar las violaciones en que incurrió, en la que declare probada la acción de daños y perjuicios intentada por la hoy quejosa en forma solidaria contra Leopoldo S. Villarreal y la Sucesión de [REDACTED]; y fije conforme a derecho el importe de ellos. No es necesario estudiar el quinto concepto de violación, que se refiere al pago de las costas de ambas instancias impuesto a la quejosa, porque en la nueva sentencia que habrá de dictarse, el Tribunal ad quem resolverá nuevamente sobre ese punto.

En mérito de lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracciones I y V de la Constitución, y en el artículo 10, fracción I y demás concordantes de la Ley de Amparo, se falla:

UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a HERMINIA MARTINEZ [REDACTED], contra la sentencia de nueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Coahuila, en el toca relativo al juicio sumario civil seguido por la quejosa contra Leopoldo S. Villarreal y la Sucesión de [REDACTED], en los términos que se indican en el considerando séptimo de esta ejecutoria.

Notifíquese, envíese testimonio de esta resolución a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente.


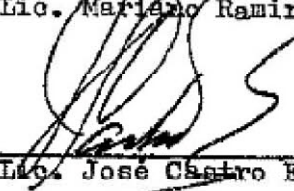
##

- - - - Así, por mayoría de cuatro votos de los Ministros --
Ramírez Vázquez, Vela, García Rojas y Presidente López Lira,
lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, siendo Ponente el Ministro García Rojas. - -
- - - - El Ministro Castro Estrada votó en contra del pro-
yecto, por la negativa del amparo. - - - - -
- - - - Firman los señores Presidente y Ministros que inte-
gran dicha Sala con el Secretario de Acuerdos de la misma -
que autoriza y da fe. - - - - -

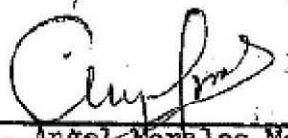
EL PRESIDENTE.


Lic. José López Lira.

LOS MINISTROS:


Lic. Mariano Ramírez Vázquez.
Lic. Alberto R. Vela.
Lic. José Castro Estrada.
Lic. Gabriel García Rojas.

EL SRIO. DE ACUERDOS DE LA SALA.


Lic. Angel Morales Moreno.

"En 21 JUN 1961 por Lista de la misma
fecha, se notificó la resolución anterior a los intere-
sados y al Ministerio Público Federal, con el fin de que

